

Bien engrasado

Petróleo y derechos humanos en Guinea Ecuatorial

Resumen

Desde 1968, cuando Guinea Ecuatorial obtuvo la independencia del régimen colonial español, el país ha sido dirigido por una sucesión de dictaduras represivas. Hasta mediados de los noventa, era uno de los países más cerrados del mundo; los escasos comentarios internacionales estaban generalmente relacionados con su terrible situación en materia de derechos humanos. Sin embargo, todo ello cambió cuando se descubrieron importantes reservas petrolíferas en las costas del país en 1995. Al tratarse de uno de los puntos calientes más novedosos para la extracción de petróleo, Guinea Ecuatorial recaba la atención internacional por sus valiosos recursos naturales. Sin embargo, su gobierno ha llegado a un nivel muy bajo en su conducta política y económica: los miles de millones de dólares ingresados por el petróleo no se han traducido en beneficios económicos generalizados para la población o una mejora drástica de la situación de los derechos humanos, lo que convierte a Guinea Ecuatorial en un ejemplo clásico de país opaco y autocrático rico en petróleo.

Después del golpe de estado sangriento del 3 de agosto de 1979, Guinea Ecuatorial ha pasado más de 30 años bajo el gobierno del Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien, junto con su familia y aliados más estrechos, mantiene un control casi absoluto de la vida política y económica en el país. El país se ha convertido en el cuarto mayor productor de petróleo del África Subsahariana (sólo por detrás de Angola, Nigeria y Sudán) y un punto de atracción de inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos. El Producto Interior Bruto per cápita se asemeja al de Italia o España. Pero muy poco de este beneficio llega a la mayoría de la población (poco más de medio millón de habitantes), que no ha salido de la pobreza, mientras que la elite se embolsa la riqueza recién descubierta en el país: El hijo del presidente se gastó más de \$42

El Producto Interior Bruto per cápita en Guinea Ecuatorial se asemeja al de Italia o España. Pero muy poco de este beneficio llega a la mayoría de la población.

El hijo del presidente se gastó más de \$42 millones entre 2004 y 2006 en casas y automóviles de lujo, casi una tercera parte del gasto total del gobierno en programas sociales en 2005, lo que incluye salud, educación y vivienda.

millones entre 2004 y 2006 en casas y automóviles de lujo en Sudáfrica y California, casi una tercera parte del gasto total del gobierno en programas sociales en 2005, lo que incluye salud, educación y vivienda.

Desde antes del auge del petróleo, las iniciativas del régimen actual de controlar el espacio político y los recursos económicos del país han generado una cultura del miedo, caracterizada por la represión de la oposición y las purgas militares. La principal diferencia en los últimos años es que hay mucho más en juego: para un régimen corrupto y nepotista que se ha beneficiado ampliamente del boom del petróleo ahora hay pocos incentivos para abrir el espacio político y aumentar la responsabilidad frente a sus ciudadanos. Sin embargo, ahora que el poder político en Guinea Ecuatorial tiene un valor sin precedentes, el país parece sumido en una grave inestabilidad. Ha habido por lo menos una docena de intentos reales y aparentes de golpe de estado desde la llegada al poder del Presidente Obiang; las intentonas reales han surgido con frecuencia de las elites rivales que pretenden hacerse con los recursos económicos del país. Tan sólo en 2004, hubo tres presuntas intentonas golpistas, entre ellas una en la que participaron mercenarios sudafricanos y el hijo de la antigua primera ministra británica Margaret Thatcher. La documentación judicial y otra correspondencia sugieren que el objetivo del golpe era destituir al gobierno para poder explotar la riqueza petrolífera de Guinea Ecuatorial.

Para un régimen corrupto y nepotista que se ha beneficiado ampliamente del boom del petróleo ahora hay pocos incentivos para abrir el espacio político y aumentar la responsabilidad frente a sus ciudadanos.

Los ingresos por el petróleo han suministrado al gobierno ecuatoguineano el dinero necesario para salvaguardar mucho mejor los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos. Los funcionarios del gobierno han desperdiciado esta oportunidad, utilizando los fondos públicos en su propio beneficio a expensas de la prestación de servicios sociales básicos para la población del país y desaprovechando otros posibles ingresos por su mala gestión. Los efectos humanos de la escasez crónica de fondos en áreas como la educación y la salud quedan claramente de manifiesto cuando se comparan los niveles de la sanidad y la alfabetización en los últimos diez años: mientras hubo oportunidades de realizar grandes avances en ambos frentes gracias a los ingresos del petróleo, la situación empeoró o sólo

mejoró ligeramente, a diferencia de los avances correspondientes en otros países.

El reconocimiento oficial de los problemas y las declaraciones señalando la voluntad de mejorar la situación todavía no se han traducido en hechos. En 2005, el gobierno ecuatoguineano comunicó a la comunidad internacional su deseo de participar activamente en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), una iniciativa voluntaria con el objetivo de fomentar que las empresas petroleras y mineras hagan público lo que pagan a los gobiernos de los países en desarrollo en los que operan. Ahora dicho impulso es cuestionable. Guinea Ecuatorial ha declarado varias veces su disposición a adoptar una mayor transparencia, como los ambiciosos planes diseñados durante las consultas nacionales de los noventa, que no han pasado del papel. Como se demuestra en este informe, existe una clara diferencia entre los discursos oficiales y la realidad sobre el terreno en Guinea Ecuatorial. De hecho, el consejo de la EITI debe eliminar rápidamente a Guinea Ecuatorial de su lista de países, si no realiza avances significativos en la aplicación de la iniciativa y la facilitación de la participación de la sociedad civil.

Los ecuatoguineanos no tienen medio alguno para exigir cuentas a los funcionarios del gobierno por sus acciones. En general, no se dispone de información fiable sobre el gasto del gobierno. Existe muy poca oposición política significativa o eficaz, y la prensa independiente es escasa. En mayo de 2008, Obiang y sus aliados ganaron 99 de las 100 representaciones parlamentarias, en unas elecciones legislativas con graves deficiencias conocidas. A pesar de que va a cumplir su trigésimo aniversario en el poder en 2009, Obiang también ha indicado su intención de volver a presentarse para otro mandato de siete años en las próximas elecciones presidenciales (previstas para diciembre de 2009). En el país, se restringen la libertad de expresión, asamblea y asociación; lo que ha obstaculizado gravemente el desarrollo de una sociedad civil nacional capaz de supervisar y cuestionar la conducta del gobierno.

En mayo de 2008, Obiang y sus aliados ganaron 99 de las 100 representaciones parlamentarias, en unas elecciones legislativas con graves deficiencias conocidas.

Los arrestos y las detenciones arbitrarias son habituales, y las denuncias regulares de intentonas golpistas suelen servir de pretexto. La detención conlleva con frecuencia la tortura y el

maltrato. El 5 de junio de 2008, su 66 cumpleaños, el Presidente Obiang indultó a 37 personas (25 de ellas presos de conciencia), pero muchos otros siguen recluidos.

Desde que el descubrimiento de importantes reservas de petróleo atrajo cada vez más atención sobre la situación del país, el gobierno ecuatoguineano se ha visto sometido a la presión diplomática occidental y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para que mejore la situación de los derechos humanos. En el pasado, se ha restringido mucho el acceso de observadores independientes al país y, en los últimos años, sólo se han producido avances limitados en términos de permitir que se informe de manera significativa sobre la situación de los derechos humanos. Las ONG internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, todavía tienen dificultades para acceder al país.

China y Estados Unidos compiten de manera cada vez más activa por las inversiones en petróleo y la influencia en Guinea Ecuatorial, y el Presidente Obiang ha intentado beneficiarse al máximo de ambos países. La rápida mejora de las relaciones con Estados Unidos a partir de 2003 culminó con la llegada de un embajador permanente a Malabo, en noviembre de 2006. En 2009, Military Professional Resources, Inc. (MPRI), una empresa privada militar estadounidense, sigue ofreciendo formación militar y de seguridad, y el gobierno ecuatoguineano quiere que amplíe su formación en materia de derechos humanos. El objetivo principal de Estados Unidos de fortalecer las relaciones con Guinea Ecuatorial parece haber anulado los intentos de presionar al gobierno ecuatoguineano para que informe sobre los abusos contra los derechos humanos y cumpla criterios en materia de derechos humanos. Es notable que la sede de la propia Embajada de Estados Unidos esté alquilada de un funcionario acusado de torturar a simpatizantes de la oposición.

El objetivo principal de Estados Unidos de fortalecer las relaciones con Guinea Ecuatorial parece haber anulado los intentos de presionar al gobierno ecuatoguineano para que informe sobre los abusos contra los derechos humanos: la sede de la propia Embajada de Estados Unidos está alquilada de un funcionario acusado de torturar a simpatizantes de la oposición.

En 2004, una investigación del Senado sobre los tratos de Guinea Ecuatorial con Riggs Bank (que ahora forma parte de PNC Bank), con sede en Estados Unidos, arrojó luz sobre la gestión en el pasado de los fondos procedentes de la industria petrolera en Guinea Ecuatorial. También se ha investigado oficialmente la actuación de

las empresas petroleras estadounidenses en Guinea Ecuatorial, un acontecimiento importante porque les demuestra que no pueden escapar del escrutinio de sus negocios ni siquiera en Guinea Ecuatorial. Según la declaración del Senador Carl Levin en una audiencia de 2004 sobre esta cuestión, algunas empresas, como Marathon Oil Corporation y Hess Corporation, “cooperaron plenamente” con la investigación. Levin señaló, no obstante, que ExxonMobil Corporation “no se había mostrado tan colaborativa” como las otras empresas.

El gobierno de Bush no exigió generalmente responsabilidades al Gobierno de Guinea Ecuatorial. A pesar de la investigación condenatoria del personal del Senado] y la imposición de algunas de las multas más cuantiosas de la historia a un banco estadounidense por sus tratos con funcionarios del gobierno ecuatoguineano, la administración recibió oficialmente al Presidente Obiang en Washington. Cualquier protesta que pudiera haber formulado Estados Unidos en materia de derechos humanos o condena por la corrupción oficial se vio anulada por el apoyo demostrado por los altos cargos de la administración al régimen de Obiang.

El nuevo gobierno de Obama tiene la oportunidad de demostrar que la seguridad energética no tiene que lograrse a expensas de los derechos humanos y la buena gestión de gobierno. Debe determinar si los altos funcionarios del gobierno ecuatoguineano tienen activos en Estados Unidos obtenidos mediante la corrupción, e intentar devolver dichos activos a sus propietarios legítimos: los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Debe garantizar, mediante las leyes y los reglamentos vigentes o nuevos, que las empresas de Estados Unidos no se hagan cómplices de la corrupción y los abusos que plagan los países ricos en recursos como Guinea Ecuatorial.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial se encuentra claramente en condiciones de invertir más recursos en la realización progresiva de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos, así como de los derechos asociados con el debido proceso. En los presupuestos aprobados por el parlamento para 2006 y 2007 se asignaron más recursos a la educación y la salud. Más allá de ello,

La seguridad energética no tiene que lograrse a expensas de los derechos humanos y la buena gestión de gobierno.

para poder acabar con el ciclo de inestabilidad política y las respuestas autoritarias a las crisis internas, Guinea Ecuatorial necesita una combinación de mayor transparencia, rendimientto de cuentas, libertad de expresión y asociación y respaldo político para el desarrollo de instituciones creíbles. Esto redunda en interés del Gobierno de Guinea Ecuatorial, sus aliados internacionales y las empresas multinacionales del petróleo que operan en el país.

Recomendaciones

Al Gobierno de Guinea Ecuatorial

- Establecer una política fiscal clara para la gestión transparente de la riqueza procedente del petróleo, lo que incluye hacer públicos los presupuestos, identificar la ubicación de las cuentas bancarias en el extranjero y realizar una auditoría de las cuentas del Estado.
- Hacer progresivamente realidad el ejercicio del derecho al acceso a la salud y la educación, y garantizar que se asignen los recursos adecuados para este objetivo.
- Asegurar que los funcionarios del gobierno declaren sus activos y pueda comprobarse la veracidad de lo declarado (de acuerdo con lo dispuesto por la legislación ecuatoguineana).
- Elaborar una lista exhaustiva de presos políticos y facilitar información sobre la ubicación de todos ellos.
- Conceder a los familiares acceso a los detenidos.
- Investigar inmediatamente las denuncias de tortura.
- Permitir que los diplomáticos extranjeros accedan a las prisiones y centros de detención del país para verificar la situación de los presos y las prisiones.
- Instaurar procedimientos que garanticen elecciones libres, justas y transparentes, lo que incluye un registro de votantes y formación y supervisión electoral, y permitir el acceso de observadores independientes y periodistas extranjeros.
- Proteger el derecho de la oposición a viajar libremente, celebrar reuniones, divulgar sus opiniones y tener un acceso equitativo a los medios de comunicación.

- Respetar y promover la libertad de expresión de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por Guinea Ecuatorial en materia de derechos humanos.
- Garantizar que se pueda realizar una evaluación independiente de la eficacia de la formación sobre derechos humanos impartida por MPRI a las agencias encargadas de la seguridad y de hacer cumplir la ley.

A la EITI

- Insistir en la participación plena de la sociedad civil independiente, especialmente las organizaciones que se ocupan de los derechos humanos y la buena gestión de gobierno, como condición esencial para declarar que Guinea Ecuatorial cumple las normas de la EITI.

Al Gobierno de Estados Unidos

- El Congreso debe ordenar que el Export-Import Bank (ExIm) y la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) exijan a las empresas del sector extractivo a las que suministran financiamiento o seguros de riesgo político que demuestren que cuentan con políticas y procedimientos efectivos en materia de seguridad y derechos humanos, y otorgar facultades a estas empresas para verificar el cumplimiento de dichas normas.
- La asistencia bilateral militar y los programas de formación en los que participan fuerzas de seguridad que también ofrecen sus servicios a las industrias extractivas, deben incluir mecanismos para garantizar que el financiamiento esté condicionado al respeto por los derechos humanos y el rendimiento de cuentas por las violaciones cometidas durante la prestación de dichos servicios de seguridad.
- El Congreso debe analizar la manera de asegurar que las empresas privadas de seguridad, que puedan ofrecer sus servicios a gobiernos y las industrias extractivas, respeten las normas de derechos humanos.

- El Congreso debe examinar las medidas que se pueden adoptar para garantizar que las empresas extractivas respeten adecuadamente las normas de derechos humanos.
- El Congreso debe ofrecer recursos y orientaciones adecuados al Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias relevantes y exigir que traten con gobiernos extranjeros las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en la provisión de seguridad y aborden la conducta de las empresas que operan en el extranjero.
- Denegar visas a los funcionarios ecuatoguineanos implicados de manera fehaciente en casos de corrupción.
- Identificar los activos de dichos funcionarios con la intención de confiscarlos y devolverlos a un gobierno libremente elegido.

Para acceder gratuitamente al texto completo de *Bien engrasado: Petróleo y derechos humanos en Guinea Ecuatorial*, por favor visitar el sitio de Human Rights Watch en:
<http://www.hrw.org/node/84253>